

Argentina: La transición alfonsinista

Oscar R. González

Oscar R. González: Periodista argentino. Actual secretario de redacción de "El Periodista" de Buenos Aires.

En diciembre de 1985, una encuesta de opinión con alto grado de confiabilidad demostró que el presidente Raúl Alfonsín contaba con la adhesión del 60 por ciento de los argentinos, que apoyaban incluso las rigideces del "Plan Austral" impuesto por su gobierno, el conjunto de duras medidas económicas antiinflacionarias que disminuyó en términos reales la capacidad adquisitiva de los salarios. Sólo algunas semanas más tarde, el 24 de enero de 1986, una huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), paralizaba el país en repudio a la política económica oficial.

Los extremos de la paradójal situación señalada enmarcan la complejidad de una sociedad que intenta, desde hace más de dos años, fundar nuevas normas de convivencia pero no puede desembarazarse fácilmente del autoritarismo militar que condicionó - y quizás aún condiciona - los comportamientos colectivos de los argentinos.

EL NUEVO DISCURSO DEL RADICALISMO

Raúl Alfonsín, un político que podría decir con Napoleón que "mi talento consiste en ver claro", asumió el gobierno tras las elecciones convocadas por la dictadura militar para garantizar una retirada ordenada de las fuerzas armadas, exigida más por el calibre de los errores cometidos y la impericia en el arte de la guerra evidenciada en el conflicto de Malvinas, que por la presión de las movilizaciones populares. La refundación de las instituciones democráticas, la plena vigencia de las libertades públicas y el respeto por el disenso dentro del pluralismo político fueron las banderas de Alfonsín. "Somos la vida", afirmaban las huestes juveniles del radicalismo, y las multitudes hacían suya la consigna hastiada de la larga pesadilla dictatorial. El nuevo discurso ético del radicalismo marcó el fin de una época, el ocaso de un peronismo confuso y obligado a abandonar sin pena ni gloria una hegemonía política que había mantenido durante cuarenta años, lapso durante el cual se fueron operando lentas pero profundas transformaciones. En 1975 había un obrero por cada 8 electores, en 1983 la proporción bajó a uno por cada 14 registrados en el padrón electoral. El Censo Nacional de 1980 indica que, de 6 millones de asalariados, los obreros industriales constituían apenas la tercera parte. Centenares de pequeñas y medianas empresas cerraron sus puertas. Sus técnicos y operarios, imposibilitados de acceder a un restringido mercado de trabajo, inundaron el país de pequeños talleres de reparación, estancos de cigarros e

ínfimos tendajones. Surge así, con gran fuerza social el "cuentapropismo", la esperanzada apuesta de los sumergidos a la ilusión de sentirse propietarios.

El fenómeno de esta economía informal, que nace objetivamente de la desocupación y el empobrecimiento, sirve para desproletarizar en términos de conciencia de clase y favorece el fortalecimiento de los sectores medios, explica en parte el éxito alfonsinista y el eco que encuentra esa convocatoria el equilibrio, excluyente de los extremos de derecha e izquierda.

La Unión Cívica Radical, partido fundado en 1890, había sufrido - como ahora el peronismo - las consecuencias de su ceguera histórica en 1946, cuando un caudillo militar, Juan Perón, capitalizó el crecimiento de la clase obrera industrial, fruto de una enérgica política de sustitución de importaciones, para construir un modelo de país basado en el fortalecimiento del Estado como árbitro de los conflictos entre las clases. Entonces, con la consolidación de la industria liviana y un balance ampliamente favorable de las exportaciones se pudo imponer un redistribucionismo que elevó a niveles impensables - alrededor del 50% - la participación de los asalariados en el ingreso nacional (hoy apenas llegará al 33%).

En aquellas épocas la dirigencia radical no visualizó las nuevas condiciones y durante años navegó confusamente aportando incluso por momentos algunos de sus cuadros a elencos ministeriales de las dictaduras de turno. Gobernó efímeramente (1963-66) gracias a la proscripción peronista y actuó como "oposición responsable" durante el borrascoso gobierno de Isabel Perón. De allí que la resurrección del radicalismo en las elecciones presidenciales de 1983 fuera más que nada aparente: tras la fachada del viejo partido asomaba una nueva concepción reivindicatoria del Estado de Derecho, de la modernización democrática, una mística que logró convocar a intelectuales independientes, universitarios fogueados en las lides estudiantiles y exizquierdistas que abandonaban la utopía por lo posible para conformar un nuevo estilo político.

UN LIDERAZGO NO TRADICIONAL

Así, el liderazgo de Alfonsín escapó a las formas tradicionales, comunes en América Latina. No suscitó fervores desmedidos ni concitó tumultuosas multitudes ni amenazó con desbordar los cauces del sistema. No lo sustentaron muchedumbres desposeídas ni campesinos sin tierra sino pequeños y medianos propietarios, profesionales y técnicos, empleados y amas de casa, estudiantes y cuentapropistas. Su ideario basado en la alianza de clases, la concertación social y el pacto democrático, la confianza en que el régimen representativo puede defenderse de sus enemigos y la fe en que un nuevo orden económico internacional posibilitará un desarrollo independiente de los países atrasados, tuvo que confrontarse con la realidad de una estructura productiva desquiciada por la gestión militar y una deuda externa de 44 mil millones de dólares, producto de especulaciones y malos negocios privados.

No obstante la pesada herencia recibida, el nuevo gobierno conquistó avances significativos en distintas áreas. En el frente externo, el latente problema limítrofe con Chile por la delimitación de la soberanía en la zona de Beagle - que puso a ambos países al borde de la guerra - fue resuelto tras un plebiscito en el que masivamente el pueblo respaldó la posición oficial favorable a aceptar el laudo papal. También se imponía reactualizar la discusión acerca de las Malvinas, después de la aventura que terminó con una derrota estrepitosa y transformó a las islas en una fortaleza de la OTAN en el área. Coherente con su política de diálogo, el gobierno obtuvo el apoyo de la comunidad internacional en favor de la reanudación de las negociaciones con Gran Bretaña, aislando a Margaret Thatcher, abandonada incluso por sus aliados más estrechos.

El prestigio de la nueva administración reforzó la presencia argentina en los foros mundiales donde se sumó a las iniciativas pacifistas y a las que demandan el respeto por la autodeterminación de los pueblos. La voluntad autónoma de Argentina fue dejada en claro durante el encuentro entre Alfonsín y Reagan, oportunidad en que el mandatario argentino discrepo públicamente con la gestión estadounidense en Centroamérica, una posición que luego el canciller Dante Caputo se encargó de atenuar al reclamar que Nicaragua explicitara su pertenencia al bloque Occidental.

También la educación, víctima predilecta de los regímenes dictatoriales fue prioritariamente atendida por la administración alfonsinista se abrieron los ingresos a colegios y universidades excluyendo cláusulas y exámenes limitativos, se autorizó el pleno funcionamiento de los centros de estudiantes, se reabrieron facultades clausuradas y se reanudaron los cursos de varias carreras básicamente relacionadas con las ciencias sociales.

OBSTACULOS Y DEBILIDADES

Pese a los éxitos parciales, dos elementos de enorme gravitación condicionaron permanentemente la viabilidad general del proyecto alfonsinista la supervivencia de fuertes componentes corporativos, consustanciales a la cultura política argentina, y la incontrolable negociación de la deuda externa, que impide cualquier intento de crecimiento. A ello debe sumarse la inexistencia de una auténtica tradición liberal-democrática ya que, desde 1930 en adelante, los partidos políticos y las instituciones republicanas mismas quedaron relegadas por la preeminencia de los grupos funcionales y las fuerzas armadas.

Lejos de allanarse a los requerimientos de la recomposición democrática emprendida por el gobierno alfonsinista, las fuerzas armadas - o gran parte de ellas - intentan preservar los espacios e influencias obtenidos a lo largo de sus recurrentes intervenciones en la vida política. Los altos mandos, por ejemplo, insistieron en el dictado de una "ley de amnistía" que beneficie a quienes intervinieron de la trágica "guerra sucia" y reivindicaron lo actuado en la lucha contra la guerrilla, negándose incluso al juzgamiento por tribunales castrenses de

los máximos responsables del terrorismo de Estado.

En este verdadero campo minado, el gobierno de Alfonsín se manejó con una prudencia bastante cercana a la debilidad: admitió la prolongación del manejo militar de los organismos estatales de seguridad - íntimamente conectados a las bandas terroristas de ultra-derecha -, ascendió a oficiales involucrados en actividades conspirativas, y no desmintió la posibilidad de sancionar una "ley de punto final", destinada a cubrir con un manto de olvido los delitos cometidos por militares en la década pasada.

Aquellas concesiones tuvieron como única contrapartida la forzada aceptación castrense al histórico juicio civil a los excomandantes en jefe, una decisión que debe computarse como el primer paso cierto hacia la erradicación del autoritarismo, aún cuando se evidencia la benignidad de ciertas condenas.

El recrudescimiento de las tensiones sociales a causa del deterioro salarial y la determinación oficial de aprobar un plan nacional de salud que excluye a las organizaciones sindicales del manejo de las millonarias "obras sociales" - los servicios asistenciales - reavivaron los enfrentamientos entre las autoridades y la Confederación General del Trabajo.

Ya durante la campaña electoral de 1983, Alfonsín había denunciado la existencia de un "pacto militar-sindical" para impedir su triunfo y, apenas llegado al gobierno intentó imponer en el Parlamento una ley de democratización sindical que no logró el apoyo mayoritario de los legisladores. De allí la burocracia sindical, que ganó su poder en negociaciones de cúpula y muchas veces estrechamente vinculada con las sucesivas gestiones militares, se lanzó a hostigar a la administración radical y, de compartir posiciones con las centrales empresariales - exigiendo privatizaciones, achicamiento del Estado y plena vigencia de una economía de mercado -, pasó ahora a levantar las banderas de la moratoria de la deuda externa, una consigna hasta hace poco sólo invocada por la izquierda, y de una "socialización humanista y cristiana de los medios de producción".

El alfonsinismo afronta también controvertidas relaciones con la poderosa Iglesia católica, mayoritariamente conducida por elementos preconciarios que apoyaron sin vacilaciones la "guerra sucia", reivindicaron el carácter jerárquico de los regímenes castrenses y vociferan hoy día contra una democracia que, afirman, alienta la pornografía, el divorcio, el aborto y la disolución de la familia. La Iglesia, que controla la mayoría de los colegios privados, posee numerosos bienes y gobierna no pocas instituciones, no sólo se halla ligada al estamento militar sino que también ejerce su influencia sobre el movimiento sindical y esa connivencia apenas disimulada contribuye a deteriorar las relaciones entre el gobierno y la jerarquía religiosa.

Las organizaciones empresarias, tanto agrarias como industriales también hostilizan y apoyan alternativamente al gobierno radical. Así, la Sociedad Rural

Argentina, que agrupa a los terratenientes, amenaza contra la eventual sanción de un impuesto a las tierras improductivas y la Unión Industrial Argentina presiona para obtener liberación de precios e incentivos para la exportación, reflejando el carácter parasitario de una burguesía sin conciencia de clase que no reinvierte las ganancias sino que las canaliza hacia la especulación y la emigración de divisas.

El radicalismo, entonces, debe compatibilizar las demandas sectoriales, emprender un moderado crecimiento y procurar el pago de los intereses de una monstruosa deuda externa. Una tarea titánica que al comienzo de su gestión el alfonsinismo emprendió intentando zafar de las políticas de ajuste reclamadas por el Fondo Monetario Internacional prolongando las discusiones sobre la refinanciación de los compromisos externos a la espera de condiciones que permitieran la constitución de un frente latinoamericano de deudores. Empujado por el crecimiento intolerable de los índices inflacionarios, el gobierno debió abandonar aquellas expectativas e imponer un rígido paquete de medidas - el "Plan Austral" - que conlleva la congelación de precios y salarios entre otros aspectos y que generó inevitablemente efectos recesivos.

Más allá del éxito obtenido en el control de la hiperinflación (de hasta 30% el índice descendió al 2% mensual), los efectos del plan son elocuentes: desde junio a diciembre de 1985, el producto bruto interno decreció en casi 3%; la caída de la actividad industrial en el tercer trimestre de ese mismo año fue de 18% respecto a idéntico período de 1984; el salario real se deterioró en 30% y la tasa de desocupación y subocupación trepó al 11.4% el nivel más alto de los últimos años.

Los datos anteriores no permiten ser optimistas en cuanto a las perspectivas de reactivación, pero ratifican la convicción de que para zanjar la crítica coyuntura actual, el gobierno deberá sortear las zancadillas que a cada paso le tiende el establishment, controlando los desbordes sectoriales de un ejército, una Iglesia, un movimiento sindical y un empresariado capaces de coaligarse para detener cualquier proyecto de cambio social.